



ENTREGA DE PRUEBAS DE DESCARGO (S)

COMISION DE POSTULACION PARA ELEGIR A
MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES

RECIBO

RECIBE: Miguel HORA: 9:26

Nombre del postulante:

Mynor Mauricio Moto Morataya

Expediente No.:

0803

DPI No.:

1605 83004 0608

• DESCRIPCIÓN DEL DESCARGO:

Que el señor interponente del impedimento
ciudadano ELVIN LEONEL DIAZ SANCHEZ, cuestiona
mi ejercicio profesional como juez y resoluciones emitidas
en casos judiciales, basado en publicaciones de
medios de comunicación y no cuestiona mi honorabilidad,
ética y profesionalismo. No tiene fundamento sus opiniones
no fue sujeto procesal en los casos que indica.

• MEDIOS DE PRUEBA QUE ACREDITA:

- ① Original certificación Junta Disciplina Judicial.
- ② Original Constancia Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios.
- ③ Copia resolución 08/Diciembre/2017, Antejercicio 422-2017
- ④ Estadística - CIDEJ - Casos Ingresados al Jd 3ro Inst. Pnol N y D C G U
- ⑤ Estadística - CIDEJ - Audiencias Celebradas, en Jd 3ro Inst. Pnol N y D C G U
- ⑥ Copia acta Ref: / Oct-18-2019 / COMA del 25-abril-2019 de C-S.J.

Guatemala, 17 de enero de 2020

NOMBRE (de quien entrega):

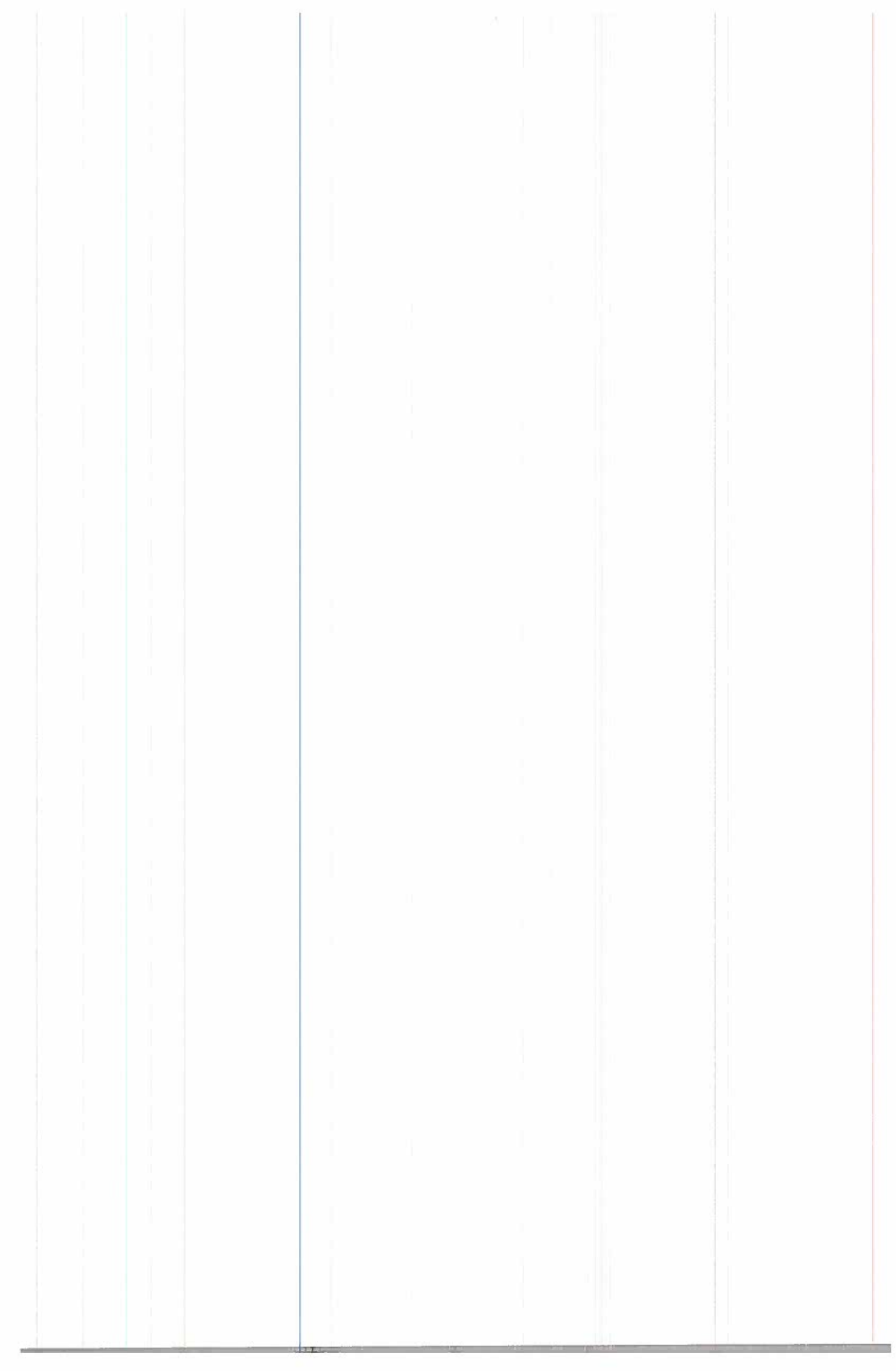
Mynor Mauricio Moto Morataya

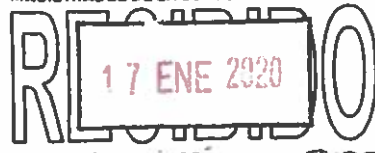
DPI (de quien entrega):

1605 83004 0608

FIRMA:

[Firma]





RECIBE: Mojos HORA: 9:25

1

HONORABLES MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE POSTULACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE NOMINA DE ASPIRANTES AL CARGO DE MAGISTADOS DE CORTE DE APELACIONES Y OTROS TRIBUNALES DE IGUAL CATEGORIA PERIODO DOS MIL DIECINUEVE, DOS MIL VEINTICUATRO.-----

MYNOR MAURICO MOTO MORATAYA, de datos de identificación personal ya conocidos por esta Comisión de Postulación dentro del expediente número CERO, OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES (0883), por este medio comparezco ante ustedes con el objeto de **pronunciarme y ofrecer prueba de descargo** respecto los impedimentos señalados en contra de mi persona como postulante dentro del Proceso de integración de nóminas para la elección de Magistrados para Corte de Apelaciones y otros Tribunales de Igual Categoría en documento dirigido ante esa Comisión por el ciudadano ELVYN LEONEL DÍAZ SÁNCHEZ y para el efecto:

EXPONGO:

1. La libre emisión del pensamiento es un derecho humano garantizado por el artículo 35 de la Constitución Política de la República y como funcionario judicial que he jurado fidelidad a la Constitución y prometido cumplir la misma, instrumentos internacionales y las leyes de nuestro país, por lo que he sido respetuoso de ese derecho; de esa cuenta, nunca he interferido con la función que cumplen los medios de comunicación social aún y cuando considero el litigio mediático como una forma de alterar las formas del proceso legal y afectar la independencia judicial al extraer de la objetividad del debido proceso legal la

A large, stylized handwritten signature in blue ink, located at the bottom left of the page.



discusión de extremos que deben resolverse por el juzgador para producir una discusión extraprocesal que dificulta la positividad de garantías que son esenciales para las partes y sobre todo generar de una persona que no conoce del fondo del asunto una opinión, que está alejada de la realidad que es sometida al imperio de la ley en un caso concreto. Ello, sin perjuicio de la objetiva e imparcial información mediática que se pueda brindar de cada caso en particular, dirigido al proceso y no al juzgador o juzgadora, o en su caso, de la percepción objetiva que se genera en la población con relación a un determinado proceso judicial.

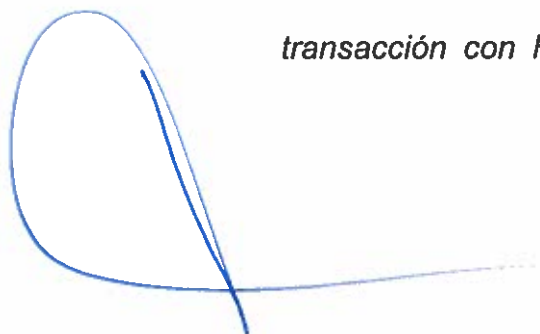
2. A pesar de esto, he confiado en que la libertad de prensa suele finalmente autorregularse sobre la base de la responsabilidad de los medios de comunicación respecto a la información que circulan y la propia conciencia que adquieren respecto a la importancia de la función que realizan y la producida por la credibilidad que acreditan o pierden ante la opinión pública sobre la base del ejercicio adecuado o irresponsable que pudieran hacer de estas garantías, lo cual puede ser utilizado en un momento determinado por cualquier persona para un beneficio personal o afectar derechos fundamentales, honorabilidad, ética o ejercicio profesional de un ciudadano en particular o la legítima función pública, siendo en el presente caso, la función jurisdiccional, conforme lo establecen los artículos 154 y 203 Constitucionales, extremos que no requieren de la intervención directa de uno como funcionario judicial que pudiera ser afectado por la información u opinión brindada al público en general. Ello, porque como se

advierte en el caso concreto, la opinión subjetiva que brinda el ciudadano ELVYN LEONEL DÍAZ SÁNCHEZ, lo realiza de conformidad a una recopilación de noticias que se publicaron en su momento histórico en medios de comunicación y no como sujeto o parte procesal de los casos a que hace alusión en la presentación de impedimentos en contra de mi postulación.

3. Afirmo esto porque en este caso, el señalamiento en mi contra del señor ELVYN LEONEL DÍAZ SÁNCHEZ se cimenta en varias **notas publicadas en los distintos medios de comunicación social escritos** que datan de hace aproximadamente un año, el más reciente.

4. De hecho, el planteamiento aunque copia literalmente extractos de las distintas notas de prensa en que se fundamenta, las cuales son **publicaciones que cuentan con reivindicación del derecho de autor** al estar expresamente atribuidas a una persona, no hace referencia a que el texto tomado inserto en el memorial como argumentación de quien presenta los impedimentos, ciudadano ELVYN LEONEL DÍAZ SÁNCHEZ, no es de su autoría.

5. Me permito indicar un fragmento de las notas que se refieren al caso mencionado por el señor ELVYN LEONEL DÍAZ SÁNCHEZ, que me parece apropiado para resaltar que lo mencionado es copia literal de pasajes de la nota periodística atribuida a un autor (que no corresponde al interponente las objeciones), que es el siguiente: *"La UNE solo fue beneficiaria de la prestación del servicio. Cuando se admite donación ellos están fuera del entorno de la transacción con Helicópteros de Guatemala..." "... La UNE únicamente es un*



usuario que le dijeron: súbase al helicóptero yo le voy a pagar y usted me extiende mi recibo de donación. Todo lo demás ¿de quién va a ser la responsabilidad? Si hablamos del partido, del contador general..."

6. En ese sentido, existe una **apropiación de la propiedad intelectual** de un tercero y da pie a un primer cuestionamiento de la idoneidad, honradez, moralidad y respeto por la ley y los derechos de otros de quien presenta el señalamiento, puesto que, aunque cuestiona mi capacidad, idoneidad, honradez y reconocida honorabilidad, **sin tener dicha persona el respeto básico de los derechos elementales de otras personas.**

7. Ahora bien, aunque el cuestionamiento se presenta de manera maliciosa aduciendo que se cuestiona mi capacidad, idoneidad, imparcialidad y objetividad, obvia observar lo que ha establecido la Corte de Constitucionalidad, con relación a ese tema al considerar lo siguiente: "...Con relación a la capacidad a que se refiere la Constitución en el artículo 113, siguiendo la definición dada por el Diccionario de la Real Academia Española es la aptitud, talento, cualidad que dispone a alguien para el buen ejercicio de algo. De conformidad con lo definido por el Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas, es aptitud o idoneidad que se requiere para ejercer una profesión, oficio o empleo. Es decir, la aptitud para desempeñar una tarea, en este caso, esa aptitud debe ser para ejercer un cargo público. En lo referente a lo idóneo, refieren las dos obras citadas, respectivamente, que idóneo es: Adecuado, apropiado para algo; y con capacidad legal para cierto actos y cargos. Ambos conceptos van íntimamente relacionados,

ya que la persona que tiene capacidad para un determinado cargo podrá ser la idónea, si además cumple con los aspectos que sean necesario para su selección...” Sentencia de fecha trece (13) de junio del dos mil catorce dictada dentro del Expediente dos mil ciento cuarenta y tres guión dos mil catorce (2143-2014).

8. En este caso, la capacidad o idoneidad, fue acreditada al cumplir con los requisitos profesionales y académicos señalados por la Constitución y que fueron requeridos por esta Comisión, es preciso resaltar que en el planteamiento formulado en mi contra, **no se argumentó ni se prueba elemento alguno que tenga relación con tales condiciones.**

9. Establecido esto, se debe indicar que el cuestionamiento presentado por una que persona **que no acredita ejercer representación legal** alguna de las partes **en los procesos que se relaciona**, en consecuencia, se trata de una actuación asentada básicamente sobre la base de la búsqueda y lectura de notas de prensa sin que presente de forma seria, irrefutable y contundente, prueba alguna de las circunstancias que denuncia, limitando la imputación del señalamiento a que eso es lo que dice la nota de prensa, por lo tanto, se basan en una actividad periodística que realizó un tercero para informar sobre ciertos hechos, sin que la información que se indica prejuzgue sobre la veracidad o no de hechos e incidencias judiciales y menos aún sobre la procedencia o no de las cuestiones que están sujetas por la ley a la resolución de determinados órganos.

10. De esa cuenta, las notas de prensa sobre las decisiones judiciales dentro



del debido proceso de los distintos procesos judiciales, no presupone, no implica y no sustenta la veracidad de la imputación, a lo sumo hace prueba de que la publicación fue realizada pero no puede ir más allá de eso.

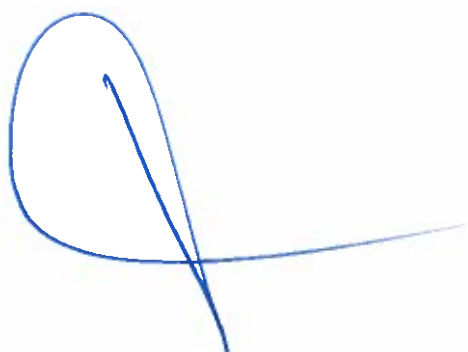
11. En tal sentido, **tengo un señalamiento que es realizado por un sujeto que no es parte de los procesos a los que hace referencia y que por lo mismo no es viable debatir con estos los pormenores de actuaciones procesales,** un señalamiento que es presentado por una persona individual que no ejerce la representación legal ni hacen parte dentro de los procesos y, en resumidas cuentas, un señalamiento que funda su veracidad en notas de prensa que se limita a informar sobre procesos judiciales de los cuales no tiene ningún conocimiento, ergo, por efecto y constancias de las notas de prensa no pueden asumirse como verdaderas por el denunciante, por la prensa y menos por un tercero. Se trata pues, **de un planteamiento espurio y malicioso;** toda vez que la única verdad y consecuentemente valida, con efectos jurídicos, de observancia obligatoria y sustentada en un sistema democrático y constitucional guatemalteco, que conoce, tramita y resuelve un proceso, es la contenida en las distintas resoluciones judiciales que se emiten en el caso concreto, lo cual corresponde exclusivamente al juez natural del proceso.

12. Esta calificación deriva de que en este expediente ya presenté en su oportunidad la certificación extendida por la Secretaría de la Junta de Disciplina Judicial en la cual consta que no tengo sanción disciplinaria alguna que me haya sido impuesta, documento que obra dentro del presente expediente, no obstante a

ello, presento una nueva certificación extendida con fecha veintisiete de diciembre del año dos mil diecinueve, con el visto bueno del Presidente de la Junta de Disciplina Judicial, donde se mantiene esa circunstancia de carecer de sanciones administrativas, la cual adjunto en original al presente memorial.

13. De igual forma, en este expediente ya presenté en su oportunidad la constancia extendida por el Presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, en la cual consta que no tengo sanción alguna emitida en mi contra por ese órgano colegiado. No obstante a ello, acompaño al presente memorial original de dicha constancia de fecha dos de agosto del año dos mil diecinueve, donde se advierte se mantiene la condición de carencia de sanciones.

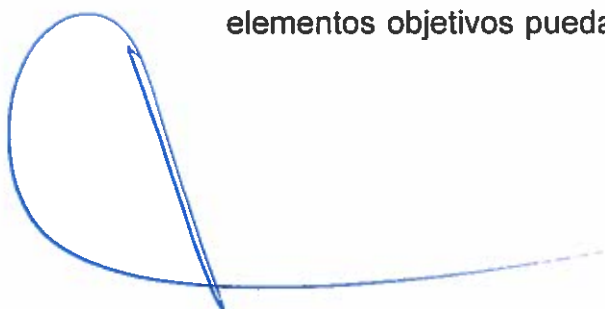
14. De la misma manera, el denunciante argumenta sobre una solicitud de antejuicio en mi contra, situación que tampoco vale la pena entrar a discutir con una persona que no es parte procesal dentro del trámite del mismo y que desconoce de todas las incidencias procesales de este trámite de antejuicio, como del proceso judicial del cual se derivó, así como de los demás a que hace alusión; por lo tanto, me limitaré a indicar que con fecha ocho de diciembre del dos mil diecisiete, el Pleno de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA por unanimidad, emitió resolución en la cual rechazan in limine la solicitud de antejuicio promovida por el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad –FECI- y por la ya extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-, en contra de mi persona en mi calidad de Juez



Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de la Ciudad de Guatemala; acompaño al presente memorial copia simple de dicha resolución, emitida dentro de las diligencias de Antejuicio número cuatrocientos veintidós guión dos mil diecisiete (422-2017).

15. En términos generales los impedimentos planteados en mi contra por parte del denunciante, se fundamenta en que se duda de la imparcialidad y objetividad de mi persona para impartir justicia, **haciendo relación de tres de los más de un mil setenta y siete casos**, que he diligenciado como Juez contralor del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de la Ciudad de Guatemala, lo cual refiero a manera de ejemplo y como una muestra de casos judiciales tramitados en la judicatura a mi cargo, solo en lo que **conciene al período del trece de octubre del año dos mil dieciocho al doce de octubre del año dos mil diecinueve**, en donde inclusive, en ese período, se llevaron a cabo **un mil trescientas sesenta y cinco audiencias** y se emitieron cientos de resoluciones de forma escrita y oral, **entre decretos, autos y sentencias**, lo cual acompaño al presente memorial la Estadística del Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial –CIDEJ- del Organismo Judicial en donde se procesó la información relativa a los **casos** ingresados en el período ya indicado, con fecha cinco de diciembre del año dos mil diecinueve y lo referente a las audiencias celebradas en el juzgado a mi cargo, procesada dicha estadística con fecha diecisiete de diciembre del año dos mil diecinueve, ambas estadísticas cuentan con firma del secretario y sello del referido juzgado.

16. Quiero reiterar que en ningún momento mi actuación hace dudar de mi imparcialidad y objetividad para emitir resoluciones, porque el señor ELVYN LEONEL DÍAZ SÁNCHEZ, como ya he indicado en reiteradas ocasiones, no ha sido parte dentro de los procesos, no ha sido abogado litigante en el juzgado que dirijo y está a mi cargo y por lo tanto no conoce las incidencias de los mismos y tampoco conoce mi forma de resolver y dentro de los expedientes que menciona en ningún momento he resuelto con falta de objetividad e imparcialidad, ya que mis resoluciones son apegadas a derecho y dentro de los procedimientos establecidos en la Constitución y la leyes de Guatemala, cumpliendo con lo establecido en los artículos 12 Constitucional, 11 bis del Código Procesal Penal y 15 de la Ley del Organismo Judicial, es más mis resoluciones están sujetas a los recursos procesales o medios de impugnación establecidos en la ley procesal de la materia, ya que las mismas no son definitivas, por lo tanto, sujetas a ser revocadas, modificadas o confirmadas como en cualquier proceso, inclusive en los procesos que menciona la persona que presenta impedimentos a mi postulación, por lo que cada resolución judicial que he dictado se ha realizado con base en las constancias procesales y apegadas a derecho y no analizadas con base en la su subjetividad con la que se está planteando la tacha por el señor ELVYN LEONEL DÍAZ SÁNCHEZ, ya que no conoce los procesos, en todas sus incidencias como lo son: la investigación y prueba recabada e incorporada a la carpeta fiscal de cada caso concreto de los mencionados, para que con elementos objetivos pueda cuestionar u opinar que he actuado en forma irregular

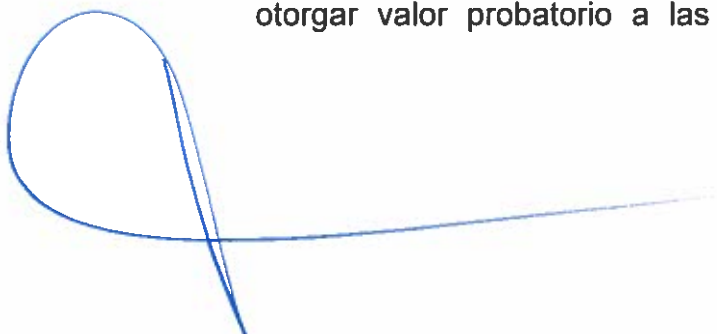


y forma maliciosa, por lo que la misma carece de sustento y se está planteando con interés de perjudicarme y sin el sustento o fundamento real, ya que basa la misma en recortes de periódicos únicamente, como ya se ha indicado.

17. Aunado a ello, el denunciante que presenta impedimentos a mi postulación, indica que supuestamente los mismos se sustentan en mi actuar irregular, retardo malicioso en dos procesos y por mi participación ante la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- el día diez de mayo del dos mil diecinueve, en donde fui convocado no como juez sino como representante de la Asociación de Jueces y Magistrados –AJMOJ-, específicamente como presidente de la Junta Directiva, período dos mil diecinueve, dos mil veinte. En cuanto a mi participación como Presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial de la República de Guatemala –AJMOJ-, ante la Ilustre Comisión Internacional de Derechos Humano –CIDH-, quiero manifestar que en la misma en ningún momento he negado la persecución conforme a la ley hecha en contra de mis pares, ni he criticado las investigaciones penales o administrativas disciplinarias que conforme a la ley, respeto a los derechos fundamentales, la función jurisdiccional y la investidura del juez deben de llevarse a cabo, respetando el debido proceso, derecho de defensa y desde luego las garantías establecidas en la legislación, a su vez reitero lo importante que es fortalecer la independencia y carrera judicial de forma integral, objetiva y conforme a los principios constitucionales, instrumentos internacionales y leyes específicas relacionadas a la carrera judicial, aunado a ello, que la defensa de esos principios

deben de sustentarse con elementos objetivos, de credibilidad bajo un marco de seguridad y certeza jurídica, entre otros aspectos que se abordaron, lo cual se originó por invitación hecha a mi persona por parte del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por invitación realizada por el Presidente de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos –COPREDHE-, de conformidad al acta número Ref: diagonal acta guión dieciocho guión dos mil diecinueve diagonal CDMA (Ref:/ Acta-18-2019/CDMA), de fecha Guatemala veinticinco de abril del año dos mil diecinueve del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, de la cual junto a los documentos de respaldo acompaño copia a la presente evacuación de la tachá, por lo que también es una denuncia espuria que lo único que persigue es criminalizar mi actuación como persona, juez y representante de los jueces y magistrados, sin fundamento alguno, por tal razón solicito, sea desestimada la tachá presentada en mi contra.

18. De todo lo anteriormente expuesto y advirtiendo que solo se reprocha mi actividad jurisdiccional y mis actos de representación gremial y no así mi honorabilidad, ética, profesionalismo y en concreto, algún presupuestos de los que están establecidos como impedimentos en la Constitución Política de la República de Guatemala y advirtiendo inclusive que la propia comisión de postulación, es del criterio que por publicaciones o noticias de medios de comunicación o críticas de resoluciones proveniente de la actividad jurisdiccional no se puede afectar la honorabilidad y ética de un postulante, ni se les debe de otorgar valor probatorio a las mismas, por lo que lo manifestado por quien



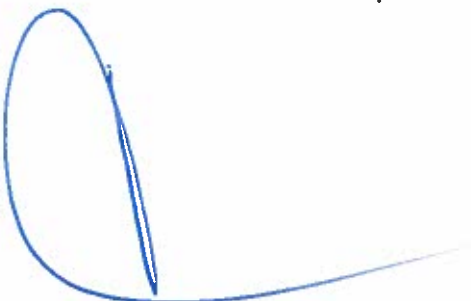
presenta los impedimentos a mi postulación, únicamente constituye una vulneración al artículo 203 Constitucional, 57 de la Ley del Organismo Judicial y artículos 1 al 4 de la Ley de la Carrera Judicial, afectando con ello, la independencia de la judicatura, al pretender descalificar la actividad que realiza el juez al resolver un caso concreto. Por lo que,

SOLICITO:

1. Se tenga por presentado este memorial y documentos adjuntos en los términos relacionados y se agregue a sus antecedentes.
2. Se me tenga por pronunciado respecto a los impedimentos señalados en contra mi persona dentro del Proceso de Integración de Nomina para Elección de Magistrados a la Corte de Apelaciones y otros Tribunales de Igual Categoría por el señor ELVYN LEONEL DÍAZ SÁNCHEZ.
3. Se tenga por ofrecidos los medios de prueba de descargo consistentes en:
 - a) original de la certificación extendida por la Secretaria de la Junta de Disciplina Judicial; b) original de constancia extendida por el Presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala; c) copia de la resolución de fecha ocho de diciembre del año dos mil diecisiete emitida por la Corte Suprema de Justicia, dentro de las diligencias de Antejuicio número cuatrocientos veintidós guión dos mil diecisiete (422-2017); d) Estadística del Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial –CIDEJ- del Organismo Judicial en donde se procesó la información relativa a los casos ingresados al Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el

Ambiente de la Ciudad de Guatemala, en el período comprendido del trece de octubre del año dos mil dieciocho al doce de octubre del año dos mil diecinueve, procesado con fecha cinco de diciembre del año dos mil diecinueve, con firma del secretario y sello del referido juzgado; e) Estadística del Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial –CIDEJ- del Organismo Judicial en donde se procesó la información relativa a las audiencias celebradas en el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de la Ciudad de Guatemala, en el período comprendido del trece de octubre del año dos mil dieciocho al doce de octubre del año dos mil diecinueve, procesado con fecha diecisiete de diciembre del año dos mil diecinueve, con firma del secretario y sello del referido juzgado; y, f) copia simple del acta número Ref: diagonal acta guión dieciocho guión dos mil diecinueve diagonal CDMA (Ref:/ Acta-18-2019/CDMA), de fecha Guatemala veinticinco de abril del año dos mil diecinueve del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, adjunto los documentos de respaldo, que se refieren a mi designación como presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial, para participar en la audiencia pública, en el segundo período de sesiones de la ilustre Comisión de Derechos Humanos –CIDH-, que se llevó a cabo el día diez de mayo del dos mil diecinueve, en Kingston, Jamaica.

4. Se declare improcedentes los impedimentos señalados por el señor ELVYN LEONEL DÍAZ SÁNCHEZ.
5. Se proceda a integrar la nómina correspondiente que será remitida al



Congreso de la República y en virtud de cumplir con los requisitos que la ley establece se incorpore mi nombre en la misma, en caso proceda conforme a los procedimientos establecidos por la propia comisión de postulación.

Guatemala, 16 de enero del 2020.-----

ACOMPAAÑO ORIGINAL Y UNA COPIA DEL PRESENTE MEMORIAL, DOCUMENTOS ADJUNTOS, ASÍ COMO UNA COPIA EN FORMATO PDF EN CD DEL PRESENTE MEMORIAL Y PRUEBAS DE DESCARGO REFERIDAS, LOS CUALES CONSTITUYEN VEINTITRES (23) FOLIOS.



MYNOR MAURICIO MOTO MORATAYA
POSTULANTE

8



OFICIO No. _____
REFERENCIA No. _____

**LAS TESTIGOS DE ASISTENCIA DE LA
GUATEMALA, C.A.
JUNTA DE DISCIPLINA JUDICIAL
CERTIFICAN:**

Que según la base de datos de la Junta de Disciplina Judicial, órgano disciplinario que inició funciones el veintuno de agosto del año dos mil, a la presente fecha, el Abogado **MYNOR MAURICIO MOTO MORATAYA; NO TIENE NINGUNA SANCION DISCIPLINARIA VIGENTE**, en la Junta de Disciplina Judicial.-----

La presente se extiende de conformidad con la Ley de la Carrera Judicial, Artículo 33. "... En las certificaciones que extiendan los órganos disciplinarios o el Consejo de la Carrera Judicial no se harán constar aquellas quejas declaradas con lugar después de cinco años de haber sido ejecutoriada la sanción...; Artículo 59 "...La Junta podrá brindar los informes que le sean requeridos con relación a determinado funcionario judicial, excluyendo las denuncias que hayan sido desestimadas o declaradas sin lugar, por no constituir antecedente."; Artículo 59 "...La Junta podrá brindar los informes que le sean requeridos con relación a determinado funcionario judicial, excluyendo las denuncias que hayan sido desestimadas o declaradas sin lugar, por no constituir antecedente."; Artículo 66, "Certificaciones. La Junta de Disciplina Judicial podrá extender las certificaciones que le requieran...".-----

También podrá extenderse certificación o constancia de carencia de sanciones disciplinarias por parte de la Junta... " ".-----

A solicitud del interesado, para los usos legales que convenga, se extiende la presente en la ciudad de Guatemala, el veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve.-----


Shirley Marylin Rodas Suntecún


Alcira Judith Martínez Mordales
Testigos de Asistencia


Vo. Bo. Gabriel Estuardo García Luna
Presidente
Junta de Disciplina Judicial



Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala

9


04115

EL INFRASCRITO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE HONOR DEL
COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS DE GUATEMALA: -----

----- -- HACE CONSTAR: -----

Que de conformidad con los registros existentes, lo cual está sujeto a la
confrontación con el sistema matriz, a la fecha de emisión de la presente
constancia, al Abogado y Notario **MYNOR MAURICIO MOTO MORATAYA**
(Colegiado 9,075), no le aparece sanción emitida en su contra por este
órgano colegiado.-----

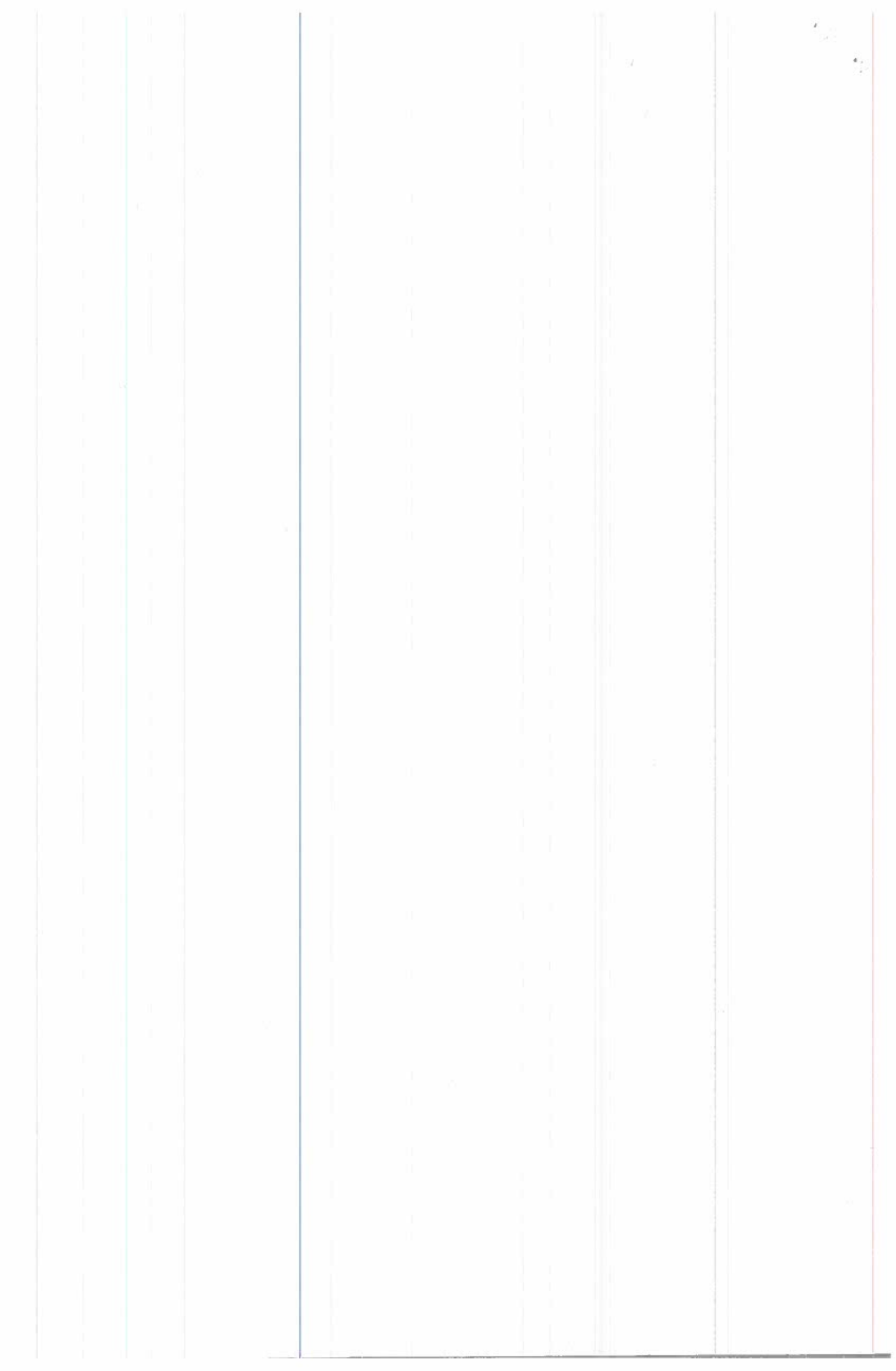
Y para los usos legales que al interesado convengan, se extiende la
presente constancia el dos de agosto del año dos mil diecinueve.-----


LIC. ERICK MIGUEL CASTILLO LOPEZ
PRESIDENTE
TRIBUNAL DE HONOR

Confrontó y revisó la base:


Lic. Hernan Soberanis Gatica
Secretario Ejecutivo







10

Not.

1/8 FOLIOS

INTERPONENTE: MINISTERIO
PÚBLICO Y CICIG

AUTORIDAD IMPUGNADA: MYNOR
MAURICIO MOTO MORATAYA,
JUEZ.

ANTEJUICIO 422-2017

En la ciudad de Guatemala el once de enero del año dos mil dieciocho, siendo las diez horas con siete minutos, en: VEINTIUNA CALLE, SIETE

GUIÓN SETENTA, TORRE DE TRIBUNALES, SEGUNDO NIVEL, GUATEMALA ZONA UNO.

Notifico la(s) resolución(es) de fecha(s):

OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, RECHAZO IN LIMINE.

a: MYNOR MAURICIO MOTO MORATAYA EN CALIDAD DE JUEZ TERCERO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL RAMO PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE DEL
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (En Contra)

Por medio de cédula de notificación que contiene las copias de ley y que entregué a:
Mishel Estrada quien se enterado(a)

Si firma:

[Firma]
Firma de quien recibe.

O que fijé:

- a) De conformidad con la ley, siendo el lugar señalado para el efecto y ante la negativa expresa de recibir ()
- b) Después de tocar en reiteradas ocasiones y nadie atendió al llamado, siendo el lugar señalado para el efecto ()

DOY FE:

F) Notificador:

Sello:

Se asienta la siguiente razón en virtud de no haberse llevado a cabo la notificación a causa de:

- () Dirección Inexacta () Lugar desocupado () Incongruencia en los datos () Persona a notificar falleció
() Persona fuera del país

CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
GUATEMALA, C.A.

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

VERIFICADO EN EL REGISTRO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



11

Antejuicio 422-2017

Página 1

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Guatemala, ocho de diciembre de dos mil diecisiete. -----

I) Se integra con los magistrados suscritos. II) Se tienen a la vista para resolver las diligencias de antejuicio promovidas por el MINISTERIO PÚBLICO, a través de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad y por la COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA, en contra del abogado MYNOR MAURICIO MOTO MORATAYA, en su calidad de Juez Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del departamento de Guatemala.

ANTECEDENTES

Los denunciantes manifiestan que a principios del año dos mil dieciséis, por recusaciones y excusas interpuestas dentro de la causa penal cero un mil setenta y uno guion dos mil quince guion cero cero doscientos diez (01071-2015-00210), conocido como el caso del "Bufete de la Impunidad", dicha carpeta judicial fue trasladada del Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, al Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, del cual es titular el abogado Mynor Mauricio Moto Morataya, indicando los denunciantes que desde ese momento existieron tratos complacientes por parte del antejuiciado, sobre todo hacia la procesada Marta Josefina Sierra de Stalling, toda vez que a criterio de los antejuiciantes, ignoró deliberadamente la resolución emitida el uno de diciembre de dos mil quince por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, por medio de la cual declaró con lugar un recurso de apelación en contra de la medida sustitutiva que se le otorgó a la abogada Sierra de Stalling, y ordenó que se decretara auto de prisión preventiva en

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RECIBIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO

contra de la referida procesada; y que fue hasta el seis de junio de dos mil diecisiete, es decir más de dieciocho meses después, que el juez dio cumplimiento a la orden de la Sala, retardando maliciosamente dicha ejecución, aún y cuando según se asevera en la denuncia respectiva, el ente investigador y el querellante adhesivo lo solicitaron en diversas ocasiones. Así mismo, el Juez denunciado otorgó en una audiencia de revisión de medidas de coerción, medidas sustitutivas a favor de los cinco abogados del bufete del señor José Arturo Morales Rodríguez, así como de los sindicados Francisco Javier Ortiz Arreaga y Miguel Ángel Lemus Aldana; resolución que fue apelada por el Ministerio Público y declarada con lugar el diecinueve de julio de dos mil dieciséis, por la Sala Cuarta de la Corte del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, ordenando que se dictara auto de prisión preventiva para los siete sindicados, orden que fue retrasada por el antejuiciado por más de diez meses y luego de varias solicitudes de los antejuiciantes, se revocaron las medidas el seis de junio de dos mil diecisiete, causando nuevamente retraso en el diligenciamiento del proceso. Así mismo, manifiestan los denunciantes que el juez Moto Morataya, al concluir la etapa intermedia dentro de la causa penal identificada, declaró el sobreseimiento por el delito de asociación ilícita, a favor de José Arturo Morales Rodríguez, Ruth Emilia Higueros Alay, Jorge Luis Escobar Gómez y Luis Fernando Zapata Zamora; sobreseimiento por el delito de prevaricato, a favor Marta Josefina Sierra de Stalling; sobreseimiento por el delito de cohecho activo, a favor de Miguel Ángel Lemus Aldana; clausura provisional por el delito de cohecho activo, a favor de José Arturo Morales Rodríguez, Ruth Emilia Higueros y Francisco Javier Ortiz Arreaga; clausura provisional por el delito de delito cohecho pasivo, a favor de Marta Josefina Sierra de Stalling; y clausura provisional por el delito de tráfico de



12

influencias, a favor de Roberto Eduardo Stalling Sierra; lo anterior, a pesar que según aseveran los antejuiciantes, presentaron numerosos medios de convicción que lograron acreditar la participación de los nueve procesados en los hechos que se señalaban, lo cual fue ignorado y valorado de manera errónea e ilegal por parte del antejuiciado. Por lo anterior, a criterio de los antejuiciantes, el funcionario denunciado generó y promovió impunidad en un caso con elementos de convicción suficientes, al emitir una resolución ilegal e irracional que supone una contradicción dentro del proceso.

CONSIDERANDO I

Esta Corte, para realizar el análisis del presente expediente, parte del derecho que asiste al funcionario denunciado, consistente en la garantía constitucional de no ser detenido, ni sometido a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que ha lugar a formación de causa y por tanto, que no les sean imputados delitos por razones ilegítimas, políticas o espurias; ya que de acuerdo con el artículo 4 de la Ley en Materia de Antejuicio, Decreto número 85-2002 del Congreso de la República: *"El antejuicio se origina por denuncia ante el juez de paz o querella presentada ante juez de primera instancia. La denuncia o querella podrá ser presentada por cualquier persona a la que le conste la comisión de un acto o hecho constitutivo de delito por parte de un dignatario o funcionario público, y no simplemente por razones espurias, políticas o ilegítimas"*.

En ese sentido, la Corte de Constitucionalidad ha sido del criterio que previo a determinar la admisibilidad a trámite de un antejuicio, corresponde a la Corte Suprema de Justicia, analizar si la denuncia reúne los requisitos básicos en cuanto a que el denunciante proporcione elementos de razonabilidad suficientes,

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

sustentados en una investigación seria y previamente realizada; que le consten directamente los hechos, salvo el caso de antejuicios directamente presentados por el Ministerio Público; y que la denuncia o querrela no se promueva por razones espurias, políticas o ilegítimas. Expedientes números: dos mil cuarenta guion dos mil tres (2040-2003), sentencia del veinticinco de marzo de dos mil cuatro; dos mil ciento cuarenta y tres guion dos mil tres (2143-2003), sentencia del siete de junio de dos mil cuatro; seiscientos treinta y cuatro guion dos mil cinco (634-2005), sentencia del ocho de agosto de dos mil cinco; dos mil ciento diez guion dos mil seis (2110-2006), sentencia del uno de marzo del año dos mil siete.

Respecto a los motivos espurios, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española define al vocablo espurio como: *falso o fingido*. Manuel Ossorio y Florit en su *Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales*, indica que el término espurio se originó del latín «*spurius*» que constituye un adjetivo que alude a todo aquello que es *falso, contrahecho o no auténtico*. En ese sentido, debe determinarse si la denuncia o querrela presentada contiene datos o hechos falsos, o bien no aporta elementos, evidencias y pruebas capaces de acreditar su existencia; de esa forma, espurio se aplica a todo lo que es falso o sin fundamento. Con base en lo anteriormente relacionado, se establece que los motivos espurios, son aquellos que se basan en hechos falsos, ilegítimos, ilegales, sin fundamento, sin bases jurídicas y no auténticos; es decir, hechos inexistentes, absurdos, contrarios a la ley o que no tiene prueba, evidencia u otros elementos de convicción que permitan acreditar su existencia.

En cuanto a los motivos políticos, Juan José Solozábal Echavarría en su obra *Una Nota Sobre el Concepto de Política*, indica que, la política puede definirse como la actividad por la que se concilian intereses diferentes dentro de una unidad,



13

Antejuicio 422-2017

Página 5

dándoles una participación en el poder, en proporción a la importancia de estos intereses para el bienestar y la supervivencia de la comunidad en su conjunto; razón por la cual dentro de la contraposición de esos intereses existentes, se generan conflictos de carácter político; por lo que en el supuesto de conflicto entre las partes enfrentadas por diferentes posturas e intereses, indica el autor citado que caben tres posibilidades: la *inmovilidad*, de modo que cada uno bloquea al otro y nadie cambia su comportamiento, actitud que a pesar de las apariencias de irracionalidad, ocurre si no se está acostumbrado a negociar, si los valores de las partes difieren considerablemente, o si de hecho existen pocas oportunidades de negociar entre sí; la *coacción*, o utilización de la fuerza física para dirimir el conflicto; o el *arreglo pacífico*, en que las partes se dan cuenta de que éste ofrece una alternativa más favorable que la inmovilización o la coacción y adoptan su comportamiento de manera que se produzca esta alternativa; en ese sentido, se puede inferir que lo político se refiere en primer lugar a personas afiliadas a un partido político y que han sido elegidas o nombradas para tareas asociadas a organismos, asociaciones o instituciones públicas y en segundo lugar, puede referirse a cualquier persona afiliada a una asociación o grupo que desarrolle actividad partidaria, con independencia de si ostentan o no algún cargo público; de lo anteriormente indicado puede decirse que los motivos políticos se refieren a intereses sectoriales o partidistas que se traducen en actos de rivalidad de tipo partidaria; es decir, aquellos encaminados a vencer al rival político, por el sólo hecho de no estar en una posición de correligionario o de constituir un potencial competidor en la esfera política partidaria.

Finalmente, al referirnos a motivos ilegítimos, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española y Manuel Ossorio y Florit, en su

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RECEIVED BY THE COURT

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, indican que la palabra ilegítimo procede del latín «*illegitimus*» vocablo compuesto por el prefijo de privación «i» y por «legis» en el sentido de ley jurídica o moral, a los que se suma el sufijo superlativo «mus». De esa cuenta, lo ilegítimo puede estar de acuerdo con la norma legal, pero si el acto es injusto, resulta ilegítimo, ya que además de concordar con lo legal, lo legítimo lo trasciende para tener que estar de acuerdo con las normas éticas. Con base en lo antes indicado, se concluye que la legitimación se manifiesta en la observancia de los valores y principios morales y éticos que constitucionalmente fundamentan las normas legales ordinarias, es decir realizar actos de justicia; en ese sentido, ilegítimo sería cometer actos de injusticia, por lo que, los motivos ilegítimos englobarían el actuar de forma injusta, amparándose en el texto de la ley, pero contraviniendo la moral, las buenas costumbres y la ética.

CONSIDERANDO II

Al realizar el estudio de las presentes diligencias de antejuicio que son sometidas a conocimiento de esta Corte, se establece que las mismas derivan de actos realizados por el funcionario denunciado en el ámbito jurisdiccional, de conformidad con las facultades que la propia Constitución Política de la República de Guatemala le confiere en el artículo 203 y regulado por el artículo 57 de la Ley del Organismo Judicial, que establece que la función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales establecidos en la ley, a los cuales les corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado; en ese sentido, en cuanto a los dos primeros hechos que se señalan, consistentes en que el funcionario denunciado retardó el cumplimiento de dos resoluciones dictadas por las Salas correspondientes dentro del proceso penal cero un mil setenta y uno guion dos mil quince guion cero cero doscientos diez (01071-



14

2015-00210), siendo éstas la de fecha uno de diciembre de dos mil quince, emitida por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, que revocó la resolución emitida por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el ambiente y ordenó revocar la medida sustitutiva otorgada a Marta Josefina Sierra de Stalling y decretar auto de prisión preventiva en contra de dicha procesada; y la de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciséis, emitida por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el ambiente dentro del proceso relacionado, que revocó la resolución emitida por el antejuiciado y ordenó decretar auto de prisión preventiva en contra de los procesados Ruth Emilia Higueros Alay, Francisco Javier Ortiz Arriaga, Miguel Ángel Lemus Aldana, Luis Fernando Zapata Lemus, Jorge Luis Escobar Gómez, José Luis Montenegro Santos y José Arturo Morales Rodríguez; estableciéndose que dichas resoluciones fueron ejecutadas por el antejuiciado el dos y seis de junio de dos mil diecisiete, respectivamente. Esta Corte, advierte en cuanto a lo manifestado, que dichos hechos no revisten características propias de acciones calificadas como delictivas, sin embargo las mismas pudieran constituir faltas de carácter administrativo, reguladas en la Ley de la Carrera Judicial, por lo que esta Corte no es el órgano competente para conocer y analizar dichas acciones, pues tal facultad es competencia del órgano disciplinario correspondiente, a donde deberán certificarse las actuaciones para iniciar el procedimiento disciplinario respectivo.

Aunado a lo anterior, a la denuncia presentada no se acompañan elementos ni documentación que acredite las aseveraciones de los denunciantes en cuanto a los hechos descritos y que permitan establecer si existían o no razones justificables por las cuales el antejuiciado no ejecutó en menor tiempo las resoluciones proferidas

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RECIBIDO EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

por las respectivas Salas jurisdiccionales, pues en la audiencia del trece de mayo de dos mil dieciséis, en donde los denunciantes solicitaron dar cumplimiento a lo resuelto por la Sala Primera, consta que el juez denunciado justificó que ya estaba programada para el diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, la audiencia para realizar dicha diligencia, sin embargo en la audiencia programada para tal efecto, no se ejecutó lo resuelto por la Sala, en virtud de la incomparecencia de la sindicada Marta Josefina Sierra Stalling, quien presentó por medio de su abogado defensor, certificado médico extendido el quince de mayo de dos mil quince por el profesional Marco Romeo Martínez Zamora; y en la audiencia del treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, en la que los antejuiciantes solicitaron que se ejecutara lo resuelto por la Sala Primera y lo que para ese momento ya había resuelto la Sala Cuarta, ambas de la Corte de Apelaciones del ramo penal, el juez denunciado indicó que ya estaban programadas las audiencias para tal efecto, para el tres, cuatro y siete de agosto de dos mil diecisiete; con base en lo anterior, no se advierte que el funcionario denunciado pudiera haber incurrido en posibles actos contrarios a la ley, por lo que en cuanto a los hechos referidos, no es procedente ordenar la pesquisa correspondiente, en atención lo ya considerado.

En relación al tercer hecho denunciado por los antejuiciantes, consistente en que el antejuiciado el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, dentro del proceso penal relacionado dictó sobreseimiento por el delito de asociación ilícita, a favor de José Arturo Morales Rodríguez, Ruth Emilia Higueros Alay, Jorge Luis Escobar Gómez y Luis Fernando Zapata Zamora; sobreseimiento por el delito de prevaricato, a favor Marta Josefina Sierra de Stalling; sobreseimiento por el delito de cohecho activo, a favor de Miguel Ángel Lemus Aldana; clausura provisional por el delito de cohecho activo, a favor de José Arturo Morales Rodríguez, Ruth Emilia Higueros y Francisco



15

Antejuicio 422-2017

Página 9

Javier Ortiz Arreaga; clausura provisional por el delito de delito cohecho pasivo, a favor de Marta Josefina Sierra de Stalling; y clausura provisional por el delito de tráfico de influencias, a favor de Roberto Eduardo Stalling Sierra; únicamente obra dentro de la denuncia presentada, referente a dicho hecho, la grabación magnetofónica que contiene la resolución de fecha dieciséis de agosto de dos mil diecisiete a la que hacen alusión los antejuiciantes, con lo cual no es posible determinar que el juez efectivamente haya obviado la valoración de los medios de prueba que fueron presentados y que aluden los denunciantes, o que haya cometido ilegalidades en dicha valoración, advirtiendo que dichos extremos no podrían ser analizados por esta Corte dentro de las presentes diligencias de antejuicio, toda vez que la naturaleza del antejuicio, es determinar si existen elementos de razonabilidad suficientes que permitan establecer la posibilidad que el funcionario denunciado haya cometido algún delito con las acciones que se denuncian, sin embargo, de analizar la resolución emitida por el juez señalado, se estarían conociendo cuestiones de carácter jurisdiccional en atención a los derechos que las partes, de conformidad con la ley, tienen en cuanto recurrir los fallos, los cuales pueden hacerse valer por los medios de impugnación establecidos, no siendo esta Corte el órgano competente para conocer de ello; determinándose en ese sentido, que no obra dentro de la denuncia presentada, documentación ni elementos que permitan establecer si los denunciantes hicieron uso de todos los medios de impugnación previstos en la ley y que estaban a su alcance para plantear sus inconformidades en contra de la resolución emitida por el juez denunciado, por lo que el antejuicio no es la vía idónea para hacer valer su inconformidad y garantizar el Debido Proceso y el derecho a recurrir los fallos dentro de todo proceso; lo que permite determinar que no existen indicios de posibles actos que revistan

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SECCIÓN DE PRODUCTOS BÁSICOS AGRÍCOLAS

características de delito por parte del antejuiciado.

De otra parte, esta Corte advierte, en virtud de la naturaleza de los hechos denunciados, el artículo 203 de la Constitución de la República de Guatemala establece el principio de independencia judicial, el cual protege la función jurisdiccional de jueces y magistrados, en tal sentido la Corte de Constitucionalidad se ha pronunciado en sentencia de fecha veinticinco de junio de mil novecientos noventa y ocho, dentro del expediente noventa guion noventa y ocho (90-98), en la cual indicó que: *"...En el campo jurisdiccional, ciertamente, magistrados y jueces están protegidos por el principio de independencia, gracias al cual tienen facultad de resolver con criterios fundados en la ley, ajenos a la interferencia de otras autoridades, así se trate de su órgano jerárquicamente superior..."*.

Así mismo, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de la Carrera Judicial, es derecho de los jueces y magistrados, que se tomen las medidas necesarias para garantizar el respeto irrestricto a las facultades e independencia de ejercicio que gozan los administradores de justicia; en tal sentido, la Corte de Constitucionalidad, ha establecido que: *"Con el objeto de crear las condiciones esenciales de la administración de justicia, la Constitución Política de la República de Guatemala, estableció en sus artículos 203, 204 y 205, que el Organismo Judicial tendrá las garantías sin las cuales no es posible concebir un sistema de justicia que dé a los particulares la seguridad jurídica de que las decisiones judiciales estarán revestidas de objetividad e imparcialidad, entre las que se encuentran: la independencia de criterio como fundamento de la potestad de juzgar..."*, expediente doscientos cuarenta y nueve guion noventa y cinco (249-95), sentencia de fecha veinticinco de enero de mil novecientos noventa y seis; en atención a lo cual, se puede establecer que el funcionario denunciado, al dictar sobreseimiento y clausura provisional a favor de

16



Antejuicio 422-2017

Página 11

los sindicatos dentro del proceso penal relacionado, lo hizo de conformidad con la facultad constitucional que le asiste; y de existir inconformidad de alguna de las partes, la ley prevé los medios de impugnación correspondientes para que sea la Sala Jurisdiccional competente, quien se pronuncie en cuanto al fallo recurrido; lo cual ocurrió en el presente caso, en cuanto al fallo emitido por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, así como el emitido por el juez denunciado, los cuales fueron impugnados de conformidad con la ley que regula el caso en concreto.

Por lo anterior, al resolver las presentes diligencias de antejuicio, debe garantizarse el respeto irrestricto de las facultades e independencia de ejercicio que gozan los administradores de justicia. Por lo que esta Corte establece que no concurren los elementos de razonabilidad necesarios que permitan advertir que el juez Mynor Mauricio Moto Morataya, haya incurrido en acciones u omisiones que revistan características de delito y que por tanto, hagan viable la pesquisa correspondiente; determinándose que las presentes diligencias de antejuicio son promovidas por motivos espurios e ilegítimos, razones por las cuales la presente solicitud de antejuicio debe ser rechazada *in limine*; sin embargo, esta Corte estima prudente certificar las actuaciones al Consejo de la Carrera Judicial, para que instruya la investigación correspondiente conforme la denuncia planteada

LEYES APLICABLES

Artículos citados y; 1, 12, 175, 194, 204, y 214 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 1, 2, 3, 4, 12 y 14 de la Ley en Materia de Antejuicio; 16, 23, 51, 77, 141 y 143 de la Ley del Organismo Judicial.

POR TANTO

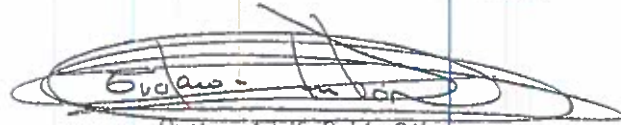
La Corte Suprema de Justicia, con base en lo considerado y leyes citadas, al


PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

TIJLZJ LUNWQO QJUNWQW 22 100000

resolver, **DECLARA:** I) Se rechaza *in limine* la solicitud de antejuicio promovida por el MINISTERIO PÚBLICO, a través de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad y por la COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA, en contra del abogado MYNOR MAURICIO MOTO MORATAYA, en su calidad de Juez Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del departamento de Guatemala. II) Remítase certificación del presente expediente al Consejo de la Carrera Judicial, para que instruya la investigación correspondiente conforme la denuncia planteada. III) Notifíquese.


Dr. JOSÉ ANTONIO PINEO BARALES
PRESIDENTE DEL ORGANISMO JUDICIAL
Y DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


Gustavo Adolfo Dubón Gálvez
MAGISTRADO PRESIDENTE
SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE APELACIONES
DEL RAMO PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS
CONTRA EL AMBIENTE,
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

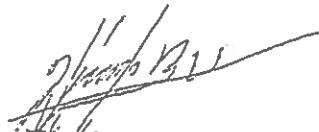

Lic. Nery Osvaldo Medina Méndez
MAGISTRADO VOCAL SEGUNDO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

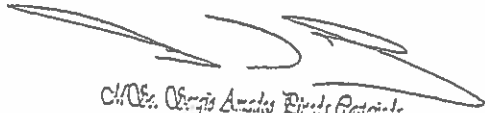

Vilafina Orellana y Orellana
Magistrada Vocal Tercero
Corte Suprema de Justicia



Antejuicio 422-2017

Página 13



Dr. Josué Felipe Baquias
MAGISTRADO VOCAL QUINTO
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



M. Carlos Amador Rivas
MAGISTRADO VOCAL SEXTO
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


Lic. Guillermo Demetrio España Mérida
Magistrado Presidente de la Sala Quinta del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo


M. Celsa Marín García Melina
MAGISTRADA VOCAL OCTAVA
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
GUATEMALA, C.A.


M. Oscar Manuel Viquez
MAGISTRADO VOCAL NOVENO
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


Dr. Ramulfo Rafael Rojas
MAGISTRADO VOCAL DÉCIMO
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

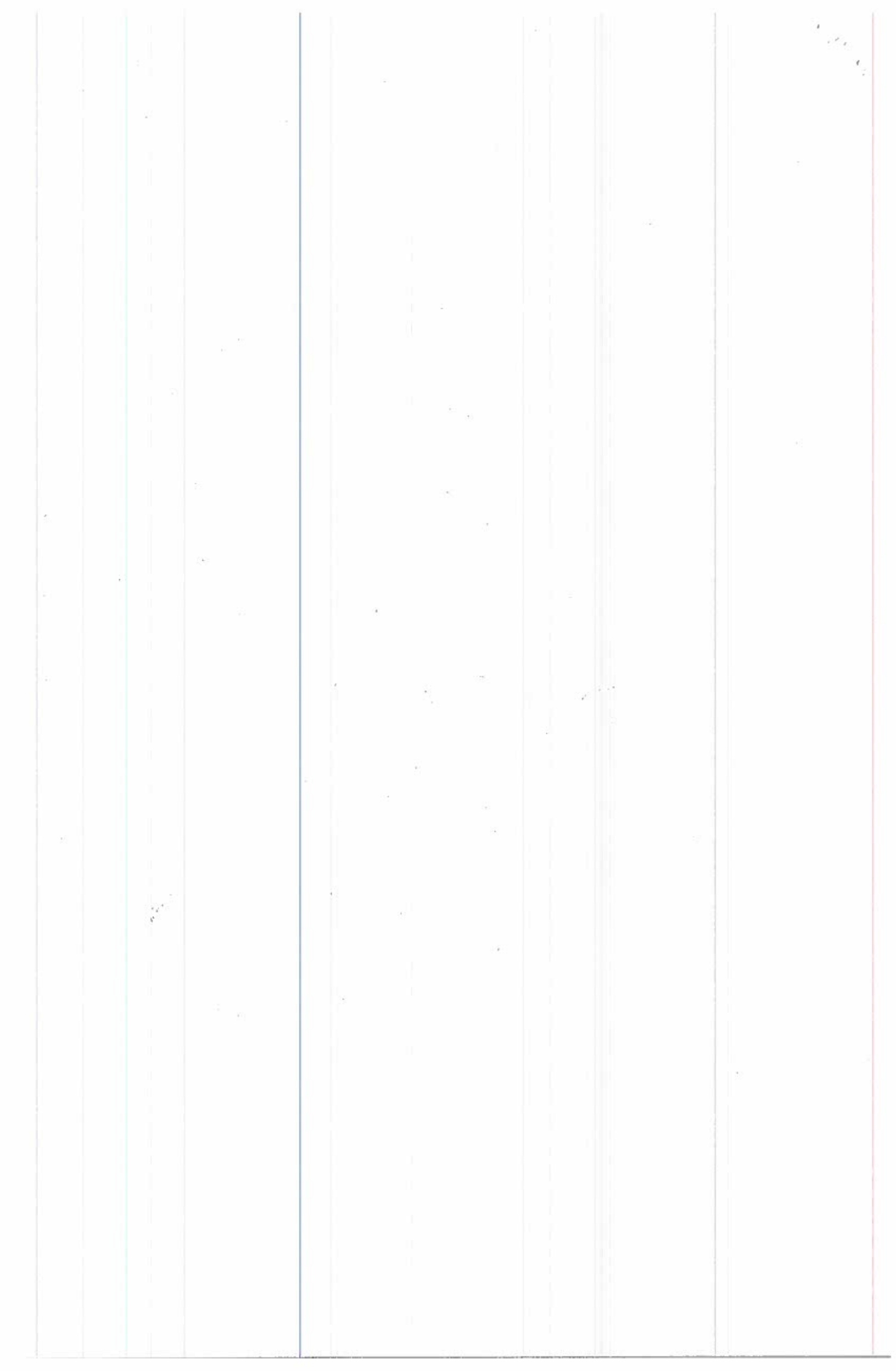

M. A. María Eugenia Morales
MAGISTRADA VOCAL DÉCIMA SEGUNDA
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

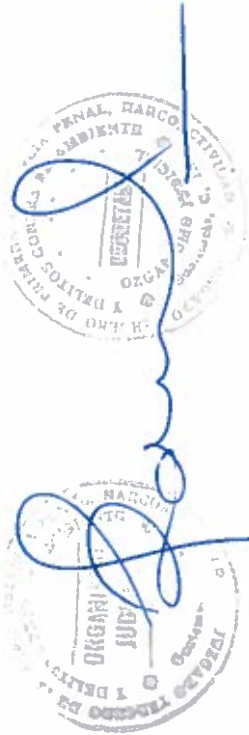

M. A. Gladys Mercedes García
MAGISTRADA VOCAL DÉCIMA TERCERA
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


Jaime Amílcar González Dávila
Presidente
Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal,
Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente


Dr. Rony Eulafio López Contreras
Secretario de la Corte Suprema de Justicia

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA





TRABAJO DESARROLLADO DEL JUEZ MYNOR MAURICIO MOTO MORATAYA, EN EL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, GUATEMALA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE OCTUBRE DE 2018 AL 12 DE OCTUBRE DE 2019

ORGANO JURISDICCIONAL	JUEZ (A)	RUBRO	AÑO 2018			TOTAL	AÑO 2019									TOTAL	TOTAL GENERAL	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			OCTUBRE
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, GUATEMALA	MYNOR MAURICIO MOTO MORATAYA	CASOS INGRESADOS*	51	9	116	176	111	86	98	91	109	91	98	93	86	38	901	1077
		SENTENCIAS	0	1	2	3	3	1	3	1	1	0	1	0	0	0	10	13
		AUTOS**	10	0	17	27	28	13	24	10	16	7	18	7	6	7	136	163

fuente: Sistema de Gestión de Tribunales, -SGT-.

Procesamiento de la información: 5 de diciembre de 2019.

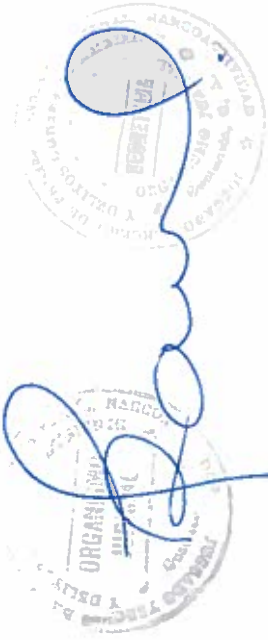
*En casos se tomó en cuenta la totalidad de lo ingresado del 13 de octubre de 2018 al 12 de octubre de 2019.

**Procesos resueltos por vías alternas.





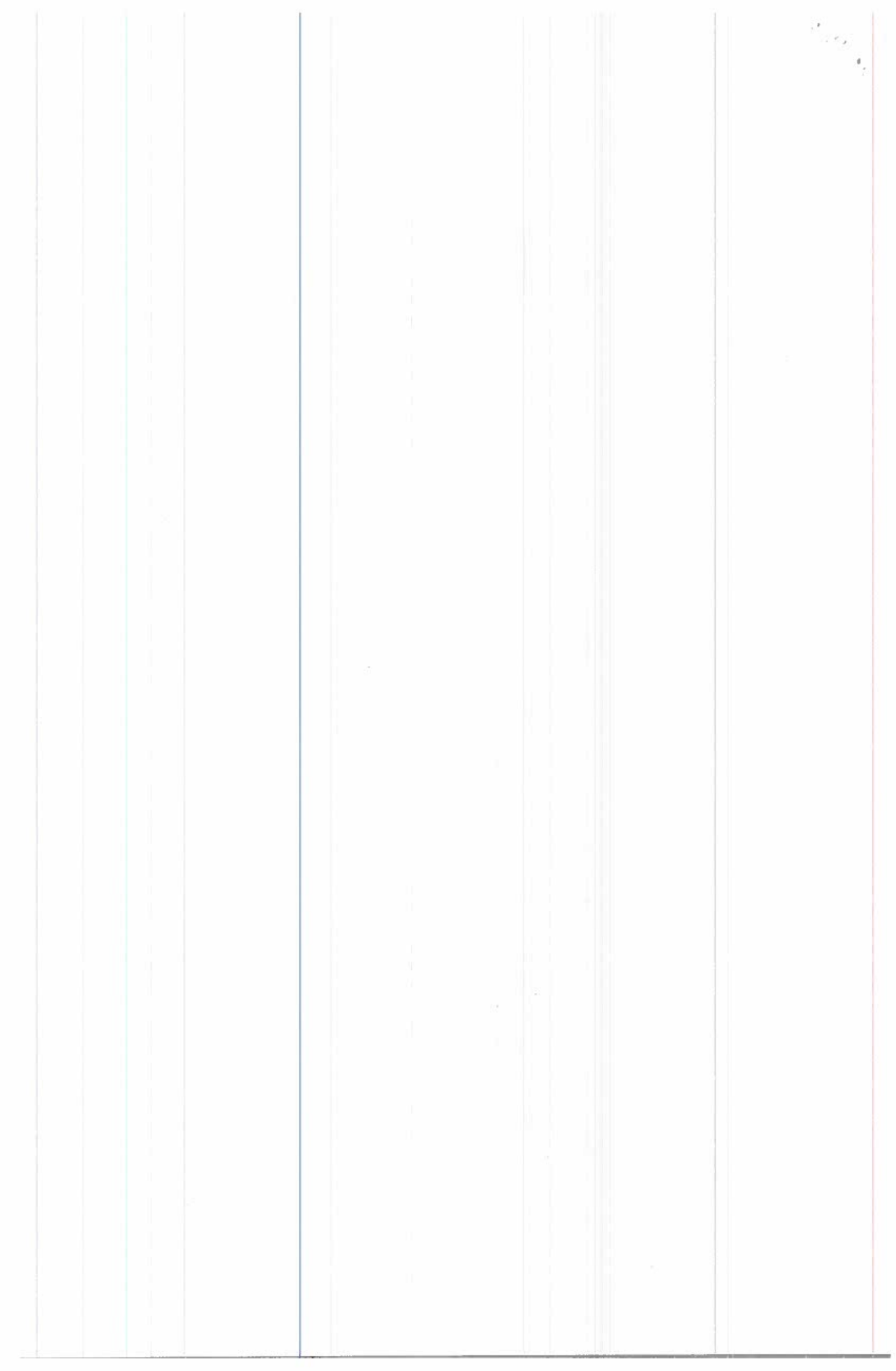
CIDEJ
CENTRO DE INFORMACION, DESARROLLO Y
ESTADISTICA JUDICIAL



AUDIENCIAS CELEBRADAS EN EL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE 2018 A OCTUBRE DE 2019

DESPACHO	ESTADO	MES	2018	2019	Total general
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, GUATEMALA	Celebrada	Enero		134	134
		Febrero		129	129
		Marzo		125	125
		Abril		91	91
		Mayo		143	143
		Junio		100	100
		Julio		108	108
		Agosto		73	73
		Septiembre		88	88
		Octubre	160	120	280
		Noviembre	3		3
		Diciembre	91		91
	Total Celebrada		254	1111	1365

Fuente: Sistema de Gestión de Tribunales SGT
Procesamiento de la informacion 17 de diciembre de 2019





Secretaría de la Corte Suprema de
Justicia
Guatemala, C.A.

Ref: 54/ Acta-18-2019 / CDMA
Guatemala, 25 de abril de 2019

Licenciado

Mynor Mauricio Moto Morataya

Presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados y
Juez Tercero de Primera Instancia Penal,
Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente,
Guatemala

URGENTE

Asunto: Acta 18-2019
De fecha: 24/04/2019

Respetable Licenciado Moto:

Atentamente informo, que en el Acta arriba identificada, la Secretaría General de la Presidencia del Organismo Judicial, remitió providencia a la que adjunta el oficio signado por el Presidente de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos, mediante el cual hace de conocimiento que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha notificado al Estado de Guatemala la realización de una audiencia pública, que se llevará a cabo el diez de mayo de dos mil diecinueve, en el marco de su Centésimo septuagésimo segundo Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a realizarse del dos al diez de mayo de dos mil diecinueve, en Kingston, Jamaica, cuyo objeto es abordar el tema "Denuncia de amenazas a la independencia judicial en Guatemala", para la cual se le invita a participar en dicha audiencia al Señor Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia y se deja a discreción del mismo, considerar la participación de un representante de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial para que conforme la delegación del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia. Así mismo solicita se envíe a la brevedad posible los nombramientos correspondientes a efecto de realizar las acreditaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, acordó: I. Designar a la Magistrada Vocal Tercera, **VITALINA ORELLANA Y ORELLANA** y al Presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial y Juez Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, Guatemala, **MYNOR MAURICIO MOTO MORATAYA**, para que participen en la *realización de una audiencia pública y conformen la delegación del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia*, actividad que se llevará a cabo el diez de mayo de dos mil diecinueve, en el marco de su Centésimo septuagésimo segundo Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a realizarse del dos al diez de mayo de dos mil diecinueve, en Kingston, Jamaica, cuyo objeto es abordar el tema "Denuncia de amenazas a la independencia judicial en Guatemala". II. Con



Secretaría de la Corte Suprema de
Justicia
Guatemala, C.A.

base al punto DÉCIMO OCTAVO, del acta número cuarenta y ocho – dos mil dieciséis de la sesión extraordinaria del Consejo de la Carrera Judicial conceder licencia con goce de salario del nueve al once de mayo de dos mil diecinueve a la Magistrada Vocal Tercera, **VITALINA ORELLANA Y ORELLANA** para que participe en el referido evento y se autoriza el pago de boletos aéreos, impuestos y viáticos correspondientes. III. Solicitar al Consejo de la Carrera Judicial, otorgue licencia con goce de salario al Presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial y Juez Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, Guatemala, **MYNOR MAURICIO MOTO MORATAYA**, del nueve al once de mayo de dos mil diecinueve, para que participe en el referido evento y se autoriza el pago de boletos aéreos, impuestos y viáticos correspondientes. IV. En virtud de la ausencia de la Presidenta de Cámara de Amparo y Antejuicio, designar a la Magistrada Vocal Primero, **SILVIA PATRICIA VALDÉS QUEZADA**, como Presidenta de Cámara de Amparo y Antejuicio en funciones del nueve al once de mayo de dos mil diecinueve.

Sin otro particular me suscribo, atentamente,

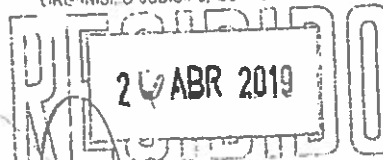

M.A. Dora Lizett Nájera Flores
Secretaria de la Corte Suprema de Justicia

Operado por:


CHRISTIAN ARAUZ

Se adjunta fotocopia del documento relacionado, el cual consta de 2 folios.

ASO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL
NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE
ORGANISMO JUDICIAL, GUATEMALA, C. A.



Recibido en las: Hrs. 12:51
Por: 



GUATEMALA, C.A.

Secretaría General de la Presidencia

003285

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO JUDICIAL: Guatemala, quince de abril de dos mil diecinueve.-----

ASUNTO: Dr. Jorge Luis Borrayo Reyes, Presidente de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos, remite oficio No. P-370-2019/JLBR/GM/IV, mediante el cual informa que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, ha notificado al Estado de Guatemala la realización de una audiencia pública, la cual se llevará a cabo el viernes 10 de mayo de 2019, en Kingston, Jamaica, misma que tiene por objeto abordar el tema: "Denuncia de amenazas a la Independencia Judicial en Guatemala", por lo que hace la invitación a participar de la misma o en su caso se delegue a un representante de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial. Ref. 2220/eao

Atentamente, por instrucciones del Señor Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Nester Mauricio Vásquez Pimentel, pase el presente oficio a la **SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA** para conocimiento del Honorable Pleno de la Corte Suprema de Justicia y lo que tenga a bien instruir.

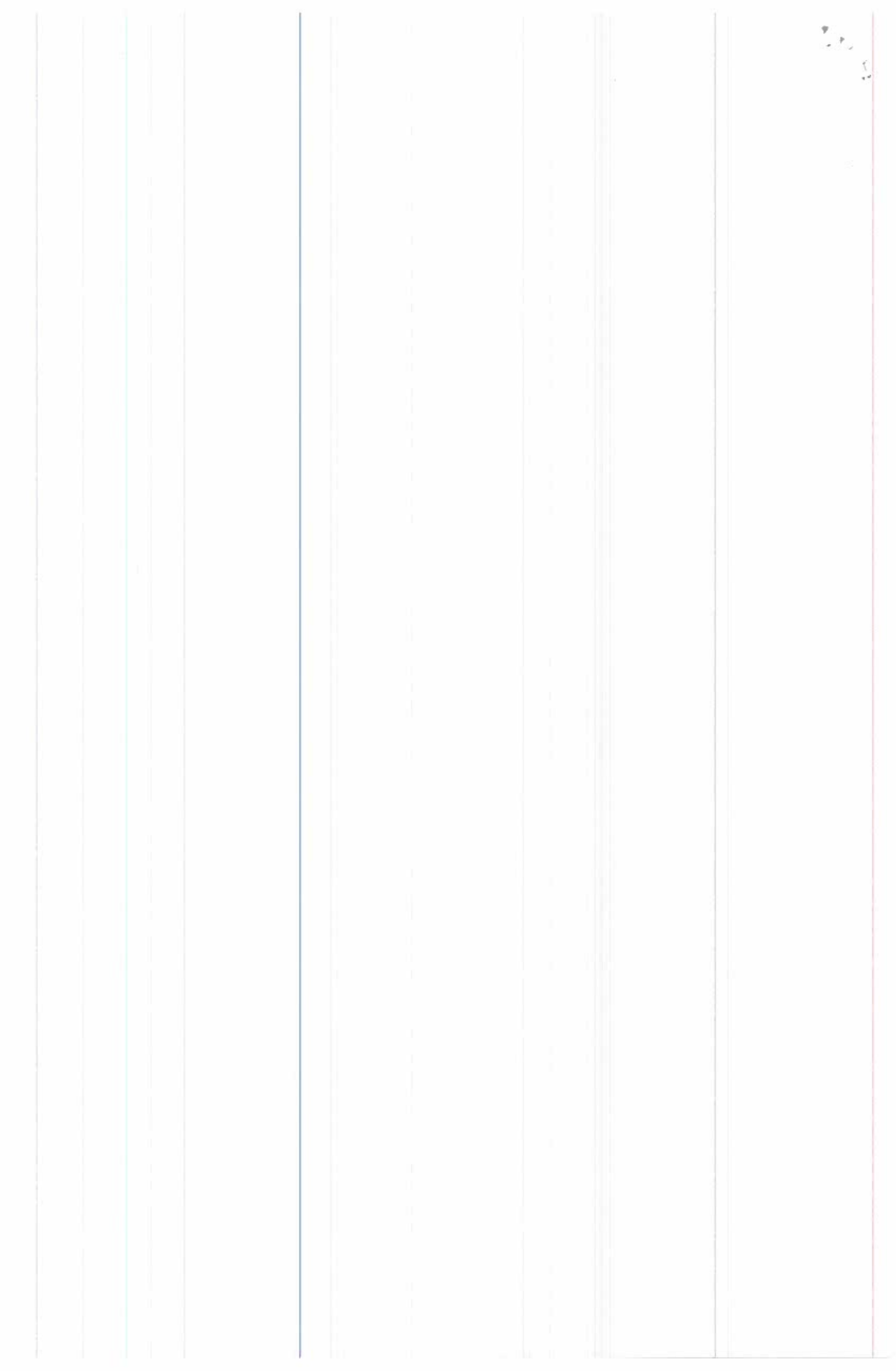
562
SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
COORDINACIÓN DE AGENDA
ORGANISMO JUDICIAL, GUATEMALA, C.A.



Juan Fernando Godínez Cuellar
Secretario General de la Presidencia
del Organismo Judicial



Palacio de Justicia, 21 calle 7-70, zona I, Tercer Nivel, Guatemala, C.A. Teléfono: 2290-4444 ext. 4000 y 4002
Internet: www.oj.gob.gt e-mail: secretariageneral@oj.gob.gt



Guatemala, 12 de abril de 2019
Ref.: P-370-2019/JLBR/GM/iv

Señor Presidente:

Atentamente me dirijo a usted con el objeto de hacer de su apreciable conocimiento que la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, ha notificado al Estado de Guatemala la realización de una audiencia pública, la cual se llevará a cabo el viernes 10 de mayo del presente, en el marco de su 172º Período de Sesiones de la CIDH, a realizarse del 02 al 10 de mayo de 2019, en Kingston, Jamaica.

Al respecto, dicha audiencia tendrá por objeto abordar el tema: "Denuncia de amenazas a la independencia judicial en Guatemala", la cual fue solicitada por la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI), para lo cual respetuosamente se le invita a participar en dicha audiencia, y se deja a su discreción considerar la participación de un representante de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial para que conforme la delegación del Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia.

En virtud de lo anterior, se solicita se envíen a la brevedad posible los nombramientos correspondientes, a efecto de realizar las acreditaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresar las muestras de mi consideración y estima.

Dr. Jorge Luis Borrayo Reyes
Presidente



Doctor
Néstor Vásquez Pimentel
Presidente del Organismo Judicial y
de la Corte Suprema de Justicia
Su Despacho

Andreeg
2220

of 12, 12



92